



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés

21-214

Proceso: CONSULTA
Demandante: **MANUELA RENDÓN RUÍZ**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: 05001-31-05-019-2018-00678-01
Tema: pensión de sobrevivientes
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Se reconoce personería al doctor **DIDIER ANDRÉS MESA MORA** identificado con C.C. 1.017.204.270 y TP 261.150 del C.S. de la J. para que represente los intereses de COLPENSIONES conforme sustitución de poder que le hiciera la doctora **ELIANA MORENO PEDROZA**, identificada con C.C. 43.921.415 y TP. 173.191 del C. S de la. J en su calidad de Representante Legal de la Sociedad **MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S.** quien, a su vez, sociedad que actúa como apoderada general de la aludida entidad conforme escritura pública No. 3374 del 2 de septiembre de 2019 de la Notaria 9ª del Circulo Notarial de Bogotá D.C.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 32** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la accionante el reconocimiento y pago de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por el deceso de su madre MARTHA ALICIA RUÍZ ARROYAVE a partir del 3 de diciembre de 2015, fecha del fallecimiento, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que a su madre MARTHA ALICIA RUÍZ ARROYAVE falleció el 3 de diciembre de 2015, teniendo la condición de pensionada, conforme Resolución No 105428 de 2012.
- ✓ Que es técnica auxiliar de enfermería, estudios que culminó el 19 de septiembre de 2015, fecha para la cual dependía económicamente de su madre y una vez terminó sus estudios, se dedicó al cuidado de su progenitora, dado el delicado estado de salud en que se encontraba, ya que padecía cáncer de mama con metástasis en el cerebro, por lo que durante el lapso de septiembre a diciembre de 2015, no le fue posible realizar ningún estudio, pero en el primer semestre de 2016 retomó sus estudios, los cuales no ha concluido a la fecha de radicación de la demanda.
- ✓ Que COLPENSIONES le negó la sustitución pensión a través de la Resolución SUB 27998 del 31 de enero de 2018, confirmada a través de resoluciones SUB 130542 del 17 de mayo de 2018, SUB 184805 del 11 de julio de 2018 y DIR 13489 del 24 de julio de 2018 aduciendo que no cumple los requisitos para acceder a la prestación, sin darle valor a los certificados de estudio presentados donde se acredita que desde el periodo 2016-1 cursó en el POLITECNICO GRANCOLOMBIANO el programa de AMINISTRACION DE EMPRESAS, el programa de TECNICA PROFESIONAL DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE en los periodos 2016-2 y 2017-1 y el programa de PSICOLOGÍA en los periodos 2017-2 y 2018-1.
- ✓ Que desde la fecha de deceso de su madre ha contado con el apoyo económico de su hermano para continuar con sus estudios, sin embargo, antes del deceso de su madre dependía económicamente de esta, por lo que le asiste derecho a la sustitución pensional.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, con el argumento que la demandante no acreditó ante la entidad la calidad de estudiante para

beneficiarse de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso de su madre. En cuanto a los hechos aceptó la fecha de deceso de la causante, el contenido de las diversas resoluciones expedidas por la entidad demandada a través de las cuales negó la pensión de sobrevivientes. Respecto a los restantes hechos afirmó que no le constan o se trata de apreciaciones de la parte actora que deberán acreditarse.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar a **MANUEL RENDÓN RUÍZ**

- La suma de \$45.769.829 como retroactivo de la pensión de sobrevivientes liquidado entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2018.
- Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 13 de febrero de 2018 y hasta la fecha del pago efectivo a la tasa más alta vigente.
- Y las costas del proceso, liquidando las agencias en derecho en la suma de \$3.200.000.

Dentro del término concedido por la ley ninguna de las partes interpuso recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

Estimó la a quo que toda vez que la causante había fallecido el 5 de mayo de 2017 la norma aplicable eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 797 de 2003, norma que establece que como beneficiarios de la prestación a los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, incapacitados para laborar en razón de sus estudios y que dependían económicamente del causante. Adujo que en el caso de autos no se discute que la causante MARTHA ALICIA RUÍZ ARROYAVE tenía la calidad de pensionada a la fecha de su deceso y que la demandante es la hija de esta y que para la fecha de su muerte tenía más de 18 años por lo que debía que dependía económicamente de su madre, requisito que encontró plenamente acreditado la quo, según las pruebas allegadas y que acreditaba la calidad de estudiante exigida por la Ley 1574 de 2012, pues si bien para la fecha de deceso de su madre, 3 de diciembre de 2015, la actora había culminado sus estudios como técnico en auxiliar de enfermería el 19 de septiembre de 2015, esta reanudó sus

estudios en el primer semestre de 2016 hasta el primer semestre de 2018 cumpliendo con las 20 horas semanas exigidas en la norma en cita, habiendo sido demostrado dentro del proceso que el lapso en el cual la actora interrumpió sus estudio fue para dedicarse al cuidado de su madre y no porque se haya dedicado a laborar, por lo que no perdió la calidad de dependiente económica respecto de su madre.

Por consiguiente, condenó a COLPENSIONES a pagar la pensión de sobrevivientes a partir del 1º de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018, cuando confiesa la demandante que cesó sus estudios, agregó el a quo que si bien la norma aludida establece un requisito en cuanto intensidad horaria no establece una obligación en cuanto al resultado del estudio, es decir en cuanto a notas o que se deba tener determinado promedio y por tanto al no haberse consagrado dicha exigencia normativamente no puede aplicarse a casos como el de la demandante, quien da cuenta que cumple la intensidad horaria, aun cuando las notas que se reportan no son las mejores, porque se estarían adicionando requisitos no contemplados por la norma.

De otro lado, condenó a COLPENSIONES a reconocer los intereses moratorios a partir del 3 de febrero de 2018, es decir, dos meses después de la solicitud, toda vez que la negativa de la prestación no tuvo justificación alguna, ya que a la entidad se allegaron los correspondientes certificados de estudios y pruebas que demostraban la calidad de beneficiaria de la actora.

2.2. CONSULTA

Toda vez que contra la sentencia de primera instancia no se interpuso ningún recurso, por lo que el proceso fue remitido para conocer el grado jurisdiccional de **CONSULTA**, según lo dispone el artículo 69 del CPT y SS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ya que la sentencia le fue adversa a COLPENSIONES, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Dueñas.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Presentaron alegados ambas partes reiterando los argumentos esbozados tanto en la demanda como en la contestación.

En primer lugar COLPENSIONES solicita se revise el fallo de primera instancia en cuanto a la acreditación de la calidad de estudiante de la demandante y el cumplimiento de la intensidad horaria exigida, toda vez que la demandante MANUELA RENDÓN RUÍZ a la fecha de deceso de su madre MARHA ALICIA RUÍZ tenía 19 años de edad, por lo que al ser mayor de edad para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de hija estudiante debía acreditar los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Ley 1574 de 2012, que dispone que se debe probar una intensidad horaria de 20 horas semanales; sin embargo según los certificados de estudio allegados expedidos por el POLITECNICO GRANCOLOMBIANO donde constancia que la peticionaria cursó materias por los periodos académicos de 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 y 20181, es claro que al momento de fallecimiento de la causante, esto es, 3 de diciembre de 2015, la demandante no se encontraba estudiando, además de los certificados aportados no se evidencia la intensidad de horaria.

Por su parte, la demandante señaló que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, toda vez que quedó acreditado que la joven MANUELA RENDÓN RUÍZ dependía económicamente de su madre, quien le proporcionó todo el sustento económico para que esta realizara y culminara sus estudios como TECNICA EN ENFERMERIA, realizados en la institución educativa de centros de estudio en salud EDESA, estudio culminado el periodo SEPTIEMBRE 2015, fecha en la que se puede acceder de forma inmediata a otra institución educativa, además de que para entonces, se dedicó al cuidado de su madre debido a su estado grave de salud, lo que justifica su desescolarización entre septiembre y diciembre de 2015, pues después del deceso de su madre retomó sus estudios en el Politécnico Gran Colombiano, conforme certificados de estudio allegados, por lo que se cumplen con los requisitos exigidos en el literal c) del artículo 47 de la ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1574 de 2012. Agregó que con la prueba testimonial se pudo comprobar que la actora dependía de su madre y su condición de estudiante, por lo que debe confirmarse la sentencia consultada.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Se circunscribe a determinar si la demandante MANUELA RENDÓN RUÍZ, en calidad de hija estudiante de la causante, tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes. En caso afirmativo se examinarán la viabilidad de los intereses moratorios concedidos.

4. CONSIDERACIONES

En primer lugar, no existe discusión que la señora MARTHA ALICIA RUÍZ ARROYAVE falleció el 3 de diciembre de 2015 y que a esta le fue reconocida pensión de vejez a través de la Resolución 105428 de 2012 , según lo reconoce Colpensiones en las diversas resoluciones expedidas en el proceso..

Por tanto, para determinar quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que dispone en su literal c):

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...) c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes ~~y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;~~ y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de *invalidez*. Para determinar cuándo hay *invalidez* se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;”

Según se prueba con el registro civil de nacimiento a folio 10 del plenario quedó demostrado que la demandante MANUELA RENDÓN RUÍZ es la hija de la pensionada MARTHA ALICIA RUÍZ ARROYAVE y que para la fecha de su deceso tenía 19 de edad, toda vez que nació el 29 de octubre de 1996, por lo que para beneficiarse de la pensión de sobrevivientes como hija mayor de edad debía demostrar que su condición de estudiante incapacitada para trabajar en razón de sus estudios y que dependía de su madre al momento de su deceso.

En cuanto a la condición de estudiante para beneficiarse de la pensión de sobreviviente, la Ley 1574 de 2012 en su artículo 2 estableció:

Artículo 2°. De la condición de estudiante. Para efectos del reconocimiento de la pensión de sobreviviente en los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes enmarcados en el artículo anterior, se deberán acreditar los siguientes requisitos:

Certificación expedida por el establecimiento de educación formal de preescolar, básica, media o superior, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el caso de las instituciones de educación superior y por las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas para el caso de los establecimientos de educación preescolar, básica y media, donde se cursen los respectivos estudios, en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales.

Para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la calidad de estudiante se demostrará con la certificación que expida la respectiva institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la duración en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica que no puede ser inferior a 160 horas, del respectivo periodo académico, el número y la fecha del registro del programa.

Estas certificaciones de asistencia se deberán acreditar a la entidad correspondiente semestralmente.

Parágrafo 1°. Para efectos de los programas diseñados sobre el sistema de créditos, se tendrán en cuenta las horas de acompañamiento directo del docente y las horas no presenciales, en donde el estudiante debe realizar las prácticas o actividades necesarias para cumplir sus metas académicas, siempre y cuando estas horas hagan parte del plan de estudios y estén debidamente certificadas por la institución educativa.

Parágrafo 2. Para programas que se estén cursando en el exterior se deberán allegar los documentos expedidos por la institución educativa en que se cursa el programa, donde conste la dedicación de la persona a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a 20 horas semanales. Igualmente se allegará la constancia de que la institución educativa deberá estar certificada por la autoridad competente para operar en ese país.

Artículo 3°. El estudiante que curse, termine su semestre o ciclo académico, y decida trasladarse, hacer cambio de modalidad o programa de formación, no perderá el derecho a la pensión de sobreviviente.

En aquellos programas en los cuales la obtención del título requiere la realización de prácticas profesionales de forma gratuita o ad honórem, se mantendrá la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando la persona jurídica de carácter público o privado bajo cuya responsabilidad se encuentra el estudiante, certifique el cargo o la labor que desempeña, la gratuidad de la misma y el período de duración.

Así mismo, la institución educativa deberá avalar la práctica realizada.

En el caso de autos, conforme las pruebas allegadas se observa que a folio 48 reposa certificado expedido por la institución EDESA que da cuenta que MANUELA RENDÓN RUÍZ culminó sus estudios en TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA el 15 de septiembre de 2015.

Así mismo a folios 50 a 56 reposan certificaciones del POLITECNICO GRANCOLOMBIANO que dan cuenta que la demandante curso materias correspondientes a la carrera ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS para el periodo académico para el periodo 2016-1 con una intensidad horaria de 20 horas semanales, para el periodo 2016-2 y 2017-1 curso materias en la carrera TECNICA PROFESIONAL EN IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE, con una intensidad de 20 y 24 horas respectivamente y para los periodos de 2017-2 y 2018-2 curso materias de PSICOLOGÍA con una intensidad de 20 horas cada uno.

Ahora si bien es cierto, que para la fecha exacta del deceso de la causante, esto es 3 de diciembre de 2015, la demandante no se encontraba estudiando pues tuvo interrupción en sus estudios por el lapso de septiembre a diciembre de 2015, esto se debió a que durante dicho lapso, MANUELA se dedicó al cuidado de su madre quien se encontraba en la fase terminal de su enfermedad y era esta quien la acompañaba y cuidaba encargándose de estar a su lado hasta el día de su deceso, tal y como de forma unánime y coincidente lo informaron los testigos VALENTINA SOTO RUÍZ y SANTIAGO RENDÓN RUÍZ.

La Corte Constitucional en sentencia SU 543 de 2019, al estudiar un asunto de similares contornos dijo:

*“5.11. Bajo esta perspectiva, la Corte entiende que acudir al **principio de la solidaridad familiar** para, en las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, excepcionar la aplicación de la regla jurídica que obliga al estudiante a ejercer sus actividades académicas para el preciso momento en que muere su progenitor deviene acorde con el sistema jurídico construido en el marco del Estado Social de Derecho **siempre que logre demostrarse, probatoriamente, que la suspensión del proceso formativo haya sido consecuencia directa del acompañamiento y cuidado que el joven estudiante debía prodigarle, en sus últimos días, al causante a fin de permitirle sobrellevar sus dolencias en condiciones de dignidad.***

*De allí se desprenden dos situaciones que corresponderá estudiar. Una es si hubo, en efecto, **un proceso formativo suspendido**, que en todo caso sufragaba el causante, con ocasión de la compañía y cuidados que el joven le prestó, y, otra, es que todas las demás razones por las que una persona no estaría estudiando para el momento del deceso de su progenitor, tales como desinterés, finalización de los estudios con anterioridad, su inicio en la vida laboral etc., son excluidas de la excepción, toda vez que no tendrían relación directa con el principio de la solidaridad familiar.*

Lo dicho en este punto encuentra, en concreto, la finalidad de no castigar, con el no reconocimiento y pago de la prestación, los actos de solidaridad sincera que surgen entre los familiares a partir de los lazos de amor que los atan. Para la Corte, se reitera, este en un principio fundamental y como tal ha sido protegido por nuestro ordenamiento jurídico, de manera que desconocerlo, en lo absoluto, sobre la base de que el mismo no ha sido comprendido en la redacción que en concreto hiciera la Ley 1574 de 2012, podría devenir desproporcionado.

*5.12. Así las cosas, y para concluir, la Corte advierte que corresponde a los jueces constitucionales, a efectos de definir si los hijos mayores de 18 años –menores de 25– habrán de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional: a) verificar que estos cumplan con las condiciones previstas en la Ley 1574 de 2012, según sea el caso, b) si lo anterior no ocurre, establecer si, en todo caso, los jóvenes están destinando tanto tiempo a sus actividades académicas que en su condición particular no cuentan con la posibilidad de trabajar, y c) **solo cuando los accionantes aleguen que la suspensión de su proceso académico, para el preciso momento en que fallece su progenitor, se dio en razón de los cuidados y acompañamiento que debieron prestarle, verificar que ello sea demostrado conforme lo señalado en el acápite 5.11 supra a efectos de que el beneficio pensional les sea reconocido.***

(...)

En el caso concreto, se advierte que el acto de solidaridad que el joven Cuartas Vargas tuvo con su padre fue, en efecto, la causa eficiente para la suspensión temporal de su proceso educativo y por tanto corresponderá a la Corte amparar los derechos fundamentales invocados, sobre la base de las siguientes consideraciones:

*En primer lugar, los documentos que sirvieron de prueba y que fueron aportados por el actor tanto en compañía de su escrito tutelar como en respuesta al Auto del 27 de septiembre de 2019, permiten colegir que aquel estaba vinculado a un programa de pregrado que, con expectativas legítimas, estaba presto a culminar. **Sin embargo, ese anhelo se vio aplazado por la grave enfermedad que le sobrevino a su padre, quien, demostrado está, por los recibos aportados al expediente, pagaba los semestres académicos hasta su deceso.***

En segundo lugar, también logró establecerse que la causa para dejar temporalmente sus clases, como se hace evidente en el escrito que presentó el actor a la Universidad el 16 de febrero de 2018, fue la existencia de inconvenientes familiares cuya índole no era otra que el

estado de salud del señor Mario Azarías. En efecto, el cáncer de cerebro del causante, por el cual fue operado en dos ocasiones y tratado, posteriormente, con sesiones de quimioterapia, empeoró gradualmente al punto de requerir constantemente hospitalizaciones.

(...)

La Sala encuentra entonces que la posición de Colpensiones, pese a fundarse en lo dispuesto por la Ley que regula lo relacionado con la condición de estudiante a efectos de reconocer una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional, castiga de forma desproporcionada a quien, en un acto de solidaridad familiar en favor de la persona que precisamente dejó causada la prestación, suspendió temporalmente su formación. De allí que, se concluye, en este caso específico es necesario establecer una excepción a la regla aplicada por la administradora sobre la base de un argumento puntual que condensa lo dicho hasta el momento: el señor Cuartas Vargas, estudiante de derecho en la Universidad Javeriana, suspendió su proceso formativo solo cuando las condiciones de su padre se agravaron al punto de requerir sus cuidados permanentes. En condiciones de normalidad, habría continuado sus estudios y el valor de los mismos habría sido sufragado por el causante, pues lo cierto es que dependía económicamente de aquel.

En consecuencia, por las razones expuestas, la Corte revocará los fallos proferidos por el Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el 26 de noviembre de 2018, y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 21 de enero de 2019, en el sentido de amparar los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la educación de que es titular el señor Nicolás Cuartas Vargas. En tal sentido, y a fin de superar la conculcación descrita, la entidad accionada deberá, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, dejar sin efecto las resoluciones que negaron el reconocimiento de la prestación para, en contraste, emitir un nuevo acto administrativo en el que se ordene su pago en favor del accionante.” (negrilla fuera de texto)

Así mismo conforme la prueba testimonial también quedó plenamente demostrado que MANUELA RENDÓN RUÍZ dependía económicamente de su madre para la fecha de su deceso, pues era esta quien le brindaba todo para su sostenimiento como vivienda, alimentación, vestuario e incluso educación, ya que la causante tenía la condición de pensionada y que después del deceso de su madre, MANUELA debió irse a vivir con su hermano, quién a partir de ese momento debió hacerse cargo de ella, ya que su padre había fallecido desde que tenía un año de vida, por lo que su madre era la única encargada de brindarle lo necesario para su subsistencia.

Por tanto estima la Sala que en el presente caso, se cumplen las condiciones para reconocer la pensión de sobrevivientes deprecadas, pues se demostró que la demandante en su condición de hija mayor de edad dependía económicamente de su madre a la fecha de su deceso, incapacitada para trabajar en razón de sus estudios, tras el fallecimiento de su madre MARTHA ALICIA RUÍZ ARROYAVE, y que pese a no haberse demostrado que cursaba estudios para el momento del deceso de la pensionada fallecida, al interior del trámite del proceso, se justificó tal situación, en el contexto de una enfermedad catastrófica como la que enfrentaba su madre, lo cual es entendible pues justamente el deber de los hijos es de prestar el auxilio y cuidado a sus padres.

Por tanto, atendiendo a las particularidades que se demostraron en el caso de autos, para la Sala es dable reconocer la prestación como de forma acertada lo estimó el a quo por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia.

Ahora, en virtud de la CONSULTA se revisó la liquidación del retroactivo por las mesadas adeudadas entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2018, encontrado que el mismo se encuentra ajustado a derecho, así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2016	5,75%	13	\$ 1.523.134	\$ 19.800.740
2017	4,09%	13	\$ 1.610.714	\$ 20.939.282
2018	3,18%	3	\$ 1.676.592	\$ 5.029.777
TOTAL				\$ 45.769.799

Empero se ADICIONARÁ la sentencia autorizando a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional que se cause, si a él hubiere lugar, el porcentaje destinado a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social, entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, que no está condicionado a la prestación de un servicio sino a la contribución económica para el fortalecimiento del sistema.

Véase para el efecto lo que sobre el particular razonó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 54480 y 46234.

De otro lado en cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que si bien de la lectura del artículo en mención se desprende que los mismos proceden por la simple mora o retraso en el pago de la mesada, y en el caso de la pensión de sobrevivientes serían 2 meses después de radicada la solicitud, conforme lo estipula el art. 1 de la Ley 717 de 2001, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su

postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

En el caso de autos, si bien la demandante aportó con su solicitud los referidos certificados de estudios, conforme se analizó, con estos no se demostraba su calidad de estudiante para la fecha de deceso de su madre, pues fue solo a través del presente proceso, que logró la demostración del derecho, acudiendo a la interpretación jurisprudencial, facultad interpretativa que solamente le está conferida a los jueces, pues el fondo de pensiones está atado a lo que dispone la Ley sin los alcances que le da la jurisprudencia, por lo que estima la Sala que no hay lugar a condenar a COLPENSIONES a los intereses moratorios, por lo que se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia en este punto ABSOLVIENDO a la entidad demandada de los mismos.

En su lugar se reconocerá la indexación de las sumas adeudadas, esto con el fin de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de causación de cada mesada y como índice final el vigente a la fecha del pago, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$.

En consecuencia la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA PARCIALMENTE con las MODIFICACIONES a que se hizo referencia.

Sin costas en esta instancia.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **MANUELA RENDÓN RUÍZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.152.460.653 contra **COLPENSIONES**, de acuerdo a los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

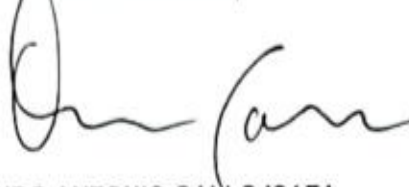
SEGUNDO: ADICIONA el numeral segundo **AUTORIZANDO** a **COLPENSIONES** descontar el porcentaje correspondiente al aporte a salud con destino a la EPS a la cual se encuentre afiliada.

TERCERO: REVOCA y ABSUELVE de los intereses moratorios y en su lugar **CONDENA** a **COLPENSIONES** a indexar las sumas adeudadas a la fecha de pago a partir de la fecha de causación de cada mesada.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MANUELA RENDÓN RUÍZ**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-019-2018-00678-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **27/09/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **28/09/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario